Las sucesivas crisis de Somalia

Josep Maria Royo Aspa
Investigador, Escuela de Cultura de Paz
Universidad Autónoma de Barcelona

La invasión etíope a Somalia en diciembre de 2006 ha provocado una nueva ola de violencia y una intervención de la comunidad internacional que ha agravado el conflicto que permanece abierto desde 1991.

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva que vive el país se inició en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre hasta que en 1991 consiguió derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esa coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de alrededor de 300.000 personas. La intervención militar internacional entre 1992 y 1995 de Naciones Unidas y Estados Unidos (EEUU) para intentar hacer frente a la grave situación humanitaria y contribuir a la resolución política de la situación fue un fracaso.

La violencia ha provocado una crisis humanitaria de alarmantes proporciones y el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas en el interior del país y de otros centenares de miles que han buscado refugio en los países vecinos (Etiopía y Kenia, principalmente).

La desintegración del Estado

Somalia representa el paradigma de Estado fallido o fracasado, es decir, un país en el que el gobierno no tiene el control real de su territorio ni es considerado legítimo por una parte importante de la población, no ofrece seguridad interna ni servicios públicos especiales a sus ciudadanos, y no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Los denominados Estados fallidos han adquirido mayor relevancia para EEUU después del 11 de septiembre de 2001 y debido a la consiguiente lucha contra el terrorismo. En el caso de Somalia, alcanza una especial importancia debido a la supuesta presencia de grupos vinculados a Al Qaeda que disponían de bases y recibían entrenamiento y protección por parte de los grupos islamistas presentes en el país. A esto se añade el surgimiento durante los años 90 de corrientes islamistas que han intentado establecer un orden basado en la ley Islámica.

A principios de 2000 se configura la Unión de Tribunales Islámicos (UTI). En la mitad de 2006 hace su aparición pública con el derrocamiento por parte de sus milicias de los señores de la guerra respaldados por EEUU. Durante los últimos 16 años, ninguna entidad somalí ha gozado del reconocimiento imprescindible del resto de los Estados para ser considerada miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. La última iniciativa de paz, que ha configurado el Gobierno Federal de Transición (GFT), tampoco dispone del reconocimiento necesario de la población -a la que se supone que representa- para que su labor tenga visos de viabilidad, ni del control del territorio más allá de su feudo en Baidoa, al sudoeste del país. Pero, ¿cómo llegó Somalia a convertirse en un estado fallido?

Los primeros 10 años después de la independencia del país en 1960 se caracterizaron por los intentos de establecer una democracia multipartidista con un Estado fuerte y centralizado que estuviera por encima de las relaciones clánicas a las que la población daba una mayor importancia política y social. La corrupción imperante en las esferas políticas y administrativas, la polarización política y la incapacidad de consensuar un sucesor tras el asesinato del Presidente Abdi Rashid Ali Sharmarke, condujeron al golpe militar de Siad Barre en 1969. Éste instauró el Socialismo Científico, un proyecto revolucionario con una inspiración socialista particular basada en un régimen de partido único consagrado alrededor de su figura, con el que pretendía acentuar el nacionalismo (la formación de la gran Somalia, agrupando bajo su poder a las diferentes regiones somalíes controladas por los países vecinos), suprimir el clanismo y poner fin a la corrupción. La eliminación del Parlamento y los partidos políticos contribuyó desde el inicio a alimentar la formación de un movimiento opositor apoyado por los países vecinos, principalmente Etiopía y Libia. La militarización del régimen, gracias al apoyo soviético en el contexto de la guerra fría, condujo a la formación de uno de los principales ejércitos del continente africano a las órdenes de la voluntad expansionista de Siad Barre. Esta cuestión contribuyó decisivamente a establecer los cimientos de las futuras crisis por las que atravesaría el país y al derrocamiento del régimen.

Entre 1977 y 1991, el país sufrió tres graves conflagraciones bélicas. La primera, la guerra de Ogadén, entre 1977 y 1978, enfrentó a Somalia con Etiopía por el control de la región de Ogadén, causando una importante derrota de las fuerzas armadas somalíes y 25.000 víctimas mortales. Este fracaso militar alimentó el surgimiento de una oposición interna al régimen. El primer movimiento de estas carácterísticas fue el Somali Salvation Democratic Front, creado por Abdullahi Yusuf, el actual Presidente del GFT, que inició una oposición armada en el noreste (Puntlandia) que fue duramente reprimida.

La segunda gran confrontación se inició en 1988 entre el ejército somalí y el Somali National Movement por el control del noroeste de Somalia (Somalilandia). Las fuerzas gubernamentales cometieron graves atrocidades contra la población civil y causaron la muerte de entre 50.000 y 60.000 personas en la región, lo que condujo a la secesión del autoproclamado Estado independiente de Somalilandia en 1991.

El tercer conflicto armado enfrentó a las fuerzas gubernamentales contra un creciente número de movimientos de liberación de base clánica entre 1989 y 1990. Estos enfrentamientos representaron la antesala de la caída del Gobierno de Siad Barre y el periodo de anarquía y desgobierno iniciado en 1991 que dura hasta la actualidad. Pero, además de estas confrontaciones, existían otros legados del régimen de Siad Barre que incentivaron el conflicto y la situación de ingobernabilidad posterior. En primer lugar, la existencia de un estado opresor y expoliador, utilizado por diversos líderes políticos para dominar al resto, monopolizar los recursos estatales y apropiarse de ellos. Segundo, la instrumentalización y politización de la identidad clánica tras dos décadas de política basada en el “divide y vencerás”, que dejó un saldo de divisiones y agravios entre los clanes. Tercero, el periodo coincide con la competición de la Guerra Fría en el Cuerno de África. Durante este periodo, el régimen recibió grandes cantidades de armamento y ayuda económica, que se evaporaron con el fin de la confrontación Este-Oeste y la pérdida de la importancia estratégica de Somalia para Occidente. Esta situación desembocó en la imposibilidad de sostener financieramente una enorme burocracia, precipitando la caída del régimen.

Los clanes somalíes

La partición europea de África en la conferencia de Berlín celebrada entre 1884 y 1885 dividió los territorios habitados por las comunidades pastoras somalíes del Cuerno de África en cinco Somalias: la Somalia británica (la zona nornoreste del país, que corresponde a la actual Somalilandia), la Somalia francesa (actual Yibuti), la Somalia italiana (centro y sur del país), la Northern Frontier District (actualmente conocida como Provincia del Nororiental de Kenia, en aquella época también británica) y Ogadén (región etíope de Somalia Occidental).

La sociedad somalí, homogénea étnica, religiosa (Islam sunnita) y lingüísticamente (somalí), se divide en clanes y subclanes, de forma similar a la mitad oriental del continente africano. El clan se configura a partir de un conjunto de personas vinculadas por un lazo de parentesco con un antepasado común. Cada clan se divide en subclanes y éstos, a su vez, en ramas subsidiarias o familias, entre los que se ha creado una amplia red de relaciones interparentales y alianzas clientelares estratégicas que los definen.

Existen diversas teorías sobre la estructura subclánica. Una aproximación a esta división sería la siguiente:

• Los Daarood ocupan el extremo oriental del Cuerno (Puntlandia), la región etíope de Ogadén, el extremo sur de Somalia y el noreste de Kenia. Se subdividen en Marehan y Kabalah (de éste último, del subsubclan Majerteen surge Abdullahi Yusuf, el actual Presidente del GFT).

• El clan Hawiye se concentra en el centro y sur del país, y es mayoritario en Mogadiscio. De este clan surgen algunos de los principales señores de la guerra, líderes políticos y de los tribunales islámicos (como Mohamed Qanyare Afrah, del subclan Murosade; Mohamed Dheere, Muse Sudi Yahalow y Omar Finish, del subclan Abgal; Hussein Aideed y Osman Atto, del subclan Haber Gedir – a este también pertenecen Abdiqassim Salad Hassan, Presidente del Gobierno Nacional de Transición surgido de Arta, Yibuti, y también el líder de la Unión de los Tribunales Islámicos, Hassan Dahir Aweys).

• Los Dir cuentan con una importante presencia en el norte de Somalia y en Yibuti, donde un subclan ocupa el gobierno del país.

• Los Isaaq son mayoritarios en Somalilandia y también cuentan con presencia en Etiopía.

• El clan Rahanweyn (el clan Digil y el Mirifle a veces se sitúan en importancia junto al Rahanweyn pero otros afirman que son subclanes de éste) se distribuye por las zonas agrícolas del centro y el sur.

Los clanes Daarood y Hawiye representan cada uno aproximadamente el 25 por ciento de la población, y los tres restantes (Dir, Isaac y Rahanweyn) entre un 10-15 por ciento de la población del país respectivamente, aunque estas cifras deben tomarse con mucha cautela. Además, existen otros clanes de importancia reducida y minorías étnicas (población Bantú, Brawans y Bajuni, que representan el 1 por ciento de la población total, estimada en ocho millones de personas).

La distribución geográfica y demográfica de los clanes se ha visto sustancialmente modificada por los desplazamientos forzados de población causados por la guerra civil. La competencia por el poder y los recursos ha alterado significativamente las fronteras de los clanes en diversas partes

del país, perdiendo influencia en unas zonas y ganando en otras. Sin embargo, el clanismo y los clivajes clánicos son una fuente de conflicto – dividen a la población, incentivan disputas por los recursos y el poder, y movilizan a las milicias – ya que los líderes políticos los han manipulado a favor de sus intereses. Por otra parte, los elders, ancianos líderes tradicionales de los clanes, son la primera fuente de mediación en los conflictos. La ley tradicional del clan ha servido como base para alcanzar acuerdos (por ejemplo, en Somalilandia). Las compensaciones por delitos de sangre o las alianzas y matrimonios de sangre son también frenos a la violencia. El comportamiento del individuo en tanto que miembro de una comunidad viene definido por sus obligaciones hacia el clan y sus líderes. La cuestión del clan desempeña un papel de primer orden en el conflicto, aunque esto no significa que la ruptura y fragmentación del Estado se circunscriba a motivos clánicos. De hecho, muchos de los enfrentamientos actuales han surgido dentro de los mismos clanes. Los principales señores de la guerra de la región centro y sur del país, por ejemplo, proceden del clan Hawiye y subclanes afines.

Procesos de paz

Desde 1991, se han desarrollado alrededor de quince procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central en el país, pero diversos elementos han dificultado esta tarea. Uno de los mayores problemas ha sido la estructura de, la sociedad somalí, dividida en clanes enemistados entre sí por años de desconfianza heredada de la autocracia represiva de los tiempos de Siad Barre (que se apoyaba en unos u otros clanes para controlar el país). Otros factores han sido la injerencia e instrumentalización de determinados países (Etiopía, principalmente, pero también Eritrea, Egipto, Libia, Arabia Saudi y EEUU, entre otros) y el poder de los diversos señores de la guerra que convirtieron la situación de guerra y desastre humanitario en su modo económico de vida.

Entre las iniciativas de paz más destacadas, cabe señalar los esfuerzos de Naciones Unidas a principios de la década de los noventa, el proceso de Sodere (Etiopía, 1996), el proceso de El Cairo (Egipto, 1997), Bosaso (Somalia, 1998), el proceso de Arta (Yibuti, 2000) y el de Eldoret/ Mbagathi (Kenia, 2002-2004).

Estos dos últimos suscitaron esperanzas en la medida en que ambos consiguieron aglutinar a una importante - aunque insuficiente - representación de los clanes y señores de la guerra somalíes. En Arta, se configuró el llamado Gobierno Nacional de Transición (GNT), que representaba principalmente los intereses del clan Hawiye, dominante en el centro y sur del país, con la oposición de una coalición de señores de la guerra apoyada por Etiopía. Durante el siguiente proceso de paz, facilitado por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), celebrado en un principio en Eldoret (Kenia) y posteriormente trasladado a Mbagathi, el gobierno keniata intentó reconciliar al GNT con sus oponentes. De esta última iniciativa de paz surge el Gobierno Federal de Transición (GFT), que ha sido percibido como un conjunto de señores de la guerra y representante del clan de los Daarood, de cuyo subsubclan, Majerteen, surge Abdullahi Yusuf, que ha sido respaldado por Etiopía. Sin embargo, el GFT no dispone, por el momento, de figuras relevantes y reconocidas del clan Hawiye. Desde el principio de su creación, la escasa presencia de la sociedad civil y de los sectores islamistas ha dificultado todavía más el desarrollo positivo e inclusivo de este proceso.

Auge y declive de los tribunales islámicos

En paralelo, los tribunales islámicos, de tendencias e ideologías diversas (que configurarán a partir de 2000 la Unión de Tribunales Islámicos – UTI), con una fuerte influencia del clan Hawiye, instauraron desde mediados de los años noventa un orden al que la población y los círculos de comerciantes fueron confiriendo cada vez más legitimidad y credibilidad. Después de los numerosos abusos cometidos por los señores de la guerra, el progresivo clima de estabilidad y funcionamiento de los servicios básicos logró que se les concediera un voto de confianza, y su labor fue reconocida y alabada por la población civil e incluso por algunos organismos internacionales.

Este orden basado en la aplicación – en algunos casos rigorista – de la Sharia también suscitó lógicos recelos entre parte de la población, mayoritariamente musulmana, y la comunidad humanitaria, aunque se prefirió dar prioridad al reestablecimiento de la paz y la seguridad en gran parte de Mogadiscio, y otras zonas del país. La interpretación estricta de la ley islámica por algunos de los tribunales de la UTI supuso una mejora de la seguridad, sin precedentes desde 1991 en los barrios de la capital y en otras ciudades controladas por ellos. Sin embargo, esta evolución positiva tuvo lugar a costa del recorte de libertades debido a esta aplicación más conservadora de la Sharia. La situación no tenía perspectivas de prosperar ya que la UTI era considerada como una amenaza por EEUU y Etiopía, que consideró que esto suponía la entrada de Al-Qaeda en el continente africano. Se presumía que el territorio somalí estaba siendo utilizado como base de operaciones, entrenamiento y reclutamiento de esta red terrorista con el beneplácito de los tribunales islámicos. En 2006 se agudizó esta tensión y desencadenó más violencia. La situación produjo la intervención internacional de Etiopía con el apoyo de Washington.

Durante los primeros meses del año 2006, se desataron graves enfrentamientos entre la UTI y una alianza de señores de la guerra de Mogadiscio financiada por EEUU (la denominada Alianza para la Restauración de la Paz y Contra el Terrorismo, ARPCT). Algunos de estos señores de la guerra formaban parte del Gobierno Federal de Transición (GFT). Estos enfrentamientos culminaron en junio con la victoria de las milicias de los tribunales y el control de todo Mogadiscio, que posteriormente se amplió al centro y sur del país, restableciendo la seguridad e instaurando la Sharia en las zonas bajo su mando.

Los tribunales se convirtieron en una creciente amenaza para el GFT, cada vez más frágil (al reducirse su control a Baidoa), fragmentado (un importante sector de parlamentarios del GFT estaba en contra de la presencia de tropas multinacionales de paz y tendía puentes de diálogo a la UTI) y apoyado abiertamente por Etiopía. Los contactos entre el GFT y la UTI para evitar una confrontación se fueron produciendo desde entonces, aunque sin éxito, debido a las tensiones internas entre las diversas facciones en el seno de la UTI (que continuó su política belicista) y la creciente implicación de Etiopía y otros países de la región, que suministraban armas a ambas partes, en violación del embargo existente desde 1992.

El papel de la comunidad internacional

El clima de tensión aumentó durante el año 2006 con el debate sobre el establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz de carácter regional, a lo que se negó la UTI amenazando con iniciar una guerra santa contra las potencias ocupantes. La guerra se desencadenó tras la propuesta de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU de permitir la creación de esta misión a finales de noviembre y la ofensiva etíope de diciembre, que ha contado con el beneplácito de la comunidad internacional. El potencial militar etíope, uno de los principales ejércitos del continente, hacía suponer una rápida derrota de los tribunales islámicos. Pero, aunque algunos sectores de la UTI han logrado ser desarticulados, facilitando así la intervención de Etiopía y los bombardeos de EEUU, su poder militar sigue casi intacto porque sus milicias y armamento se encuentran bajo el control de los clanes, principalmente el Hawiye. Actualmente, persiste la violencia entre las fuerzas etíopes apoyadas por las milicias del GFT y una insurgencia compuesta por los grupos armados de los tribunales islámicos, los clanes y algunos señores de la guerra opuestos a la presencia de tropas extranjeras. Los enfrentamientos de los últimos meses han provocado la muerte de centenares de personas y el desplazamiento forzado de gran parte de la población en la capital.

Es necesario cumplir, al menos, cuatro requisitos para que no fracase completamente el proceso de paz: fin de las hostilidades, retirada incondicional de Etiopia, un proceso real de reconciliación nacional y la puesta en marcha de un proceso político que configure un GFT más inclusivo. Estas condiciones son también necesarias para facilitar la misión internacional de la Unión Africana (African Union Mission to Somalia, AMISOM) y evitar que sea percibida como una fuerza ocupante aliada del GFT. La actual hostilidad hacia la AMISOM imposibilita el cumplimiento de su mandato y su necesaria ampliación. Diversos países, como Ghana, Burundi o Nigeria, que habían anunciado su participación en la misión hasta alcanzar al menos la mitad de los 8.000 peacekeepers africanos previstos en su inicio, han pospuesto su colaboración ante las dificultades logísticas, financieras y, principalmente, de seguridad. De hecho, estos países han condicionado el despliegue de sus tropas a una resolución positiva de la situación, por lo que la ONU se está planteando tomar el relevo y volver a Somalia. Por el momento, sólo 1.700 militares ugandeses se encuentran en Mogadiscio, pero apenas sirven para garantizar la seguridad del puerto, aeropuerto y sede del Gobierno, y su presencia en las calles de la capital es casi inexistente. Etiopía, por su parte, afirma que desearía la retirada de sus tropas y su relevo por las de la misión de la Unión Africana (UA) para evitar un vacío de poder, pero que el reducido tamaño del contingente actual de la Unión no lo permite.

La Unión Europea (UE), principal donante de Somalia, podría utilizar su influencia mediadora y aumentar la presión para lograr de Etiopía y el GFT este compromiso. Para ello tendría que condicionar la ayuda que destina a ambos países al avance positivo del proceso político.

Esta ayuda es imprescindible en el caso somalí para el sostenimiento del GFT. La condicionalidad debería ir acompañada de incentivos económicos y propuestas para solucionar el problema que supondría para Etiopía que determinados sectores hostiles a sus intereses puediesen llegar a formar parte del Gobierno de Somalia. Un acuerdo entre ambos países podría incluir una cláusula de no agresión garantizada por la Unión Europea, la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Liga Árabe y Estados Unidos. Este acuerdo promovería la supervisión conjunta de sus fronteras durante esta fase transitoria para acabar con la entrada de armas y de supuestos miembros de Al Qaeda, controlar el comercio ilegal y la piratería, y supervisar la completa salida de las tropas etíopes.

EL acuerdo sería un estímulo para poner fin a la injerencia etíope y estadounidense en el país. Una solución a la situación en Somalia contribuiría a negociar sobre el contencioso entre Eritrea y Etiopía, que permanece bloqueado y que se ha visto gravemente influenciado por la crisis somalí, ya que ambos países apoyan a los sectores opuestos en Somalia.

¿Otra oportunidad de reconciliación perdida?

El 15 de julio de 2007 se inició la Conferencia Nacional de Reconciliación, pospuesta tres veces. Dicha conferencia, surgida tras la presión ejercida por Occidente y Naciones Unidas sobre el Gobierno Federal de Transición, debería promover este proceso de diálogo y reconciliación real y ampliar el GFT a otros sectores sociales y políticos y a la Unión de Tribunales Islámicos. Sin embargo, aunque el GFT finalmente ha invitado a algunos grupos opositores y a miembros de los tribunales islámicos a participar en la conferencia, éstos últimos se han negado a asistir, y el clan Hawiye ha planteado algunas demandas para sumarse al proceso, como la retirada de las tropas etíopes, lo que genera dudas sobre el alcance real del proceso. Estados Unidos, aunque satisfecho por el derrocamiento de la UTI, ha decidido unirse a la Unión Europea en la promoción de este diálogo inclusivo, debido a la inestabilidad producida por los últimos enfrentamientos y el surgimiento de una resistencia armada y política de carácter multifacético contra la ocupación etíope y el GFT. No obstante, la integración de la conferencia, con importantes ausencias, dirigida principalmente por el GFT y sin posibilidades de modificar la configuración de éste último, siembra numerosas dudas sobre su resultado. La revocación de la expulsión del presidente del Parlamento Federal de Transición, Sharif Hassan Sheik Aden, que había intentado establecer puentes de diálogo con los tribunales, sería un buen inicio de acercamiento.

Para evitar una reedición de la fracasada experiencia de Naciones Unidas y EEUU de principios de los noventa, la única solución posible es un diálogo inclusivo de todos los actores políticos y armados decisivos. El objetivo debe ser una remodelación del GFT que garantice la presencia de los sectores islamistas y líderes prominentes del clan Hawiye en las Instituciones Federales de Transición y hacerles partícipes de un proceso político que abra el camino a un futuro en paz.
.

Los comentarios de FRIDE ofrecen un análisis breve y conciso de cuestiones internacionales de actualidad en los ámbitos de la democracia, paz y seguridad, derechos humanos, y acción humanitaria y desarrollo. Todas las publicaciones de FRIDE están disponibles en www.fride.org

Las ideas expresadas por los autores en los documentos difundidos en la página web no reflejan necesariamente las opiniones de FRIDE. Si tiene algún comentario sobre el artículo o alguna sugerencia, puede ponerse en contacto con nosotros en comments@fride.org

Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
C/ Goya, 5-7 pasaje 2ª – 28001 Madrid – Telf: 91 244 47 40 – Fax: 91 244 47 41 – E-mail : fride@fride.org
www.fride.org